



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Buenos Aires, 13 de Septiembre de 2022

Vistos los autos: "Unilever de Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", de los que

Resulta:

I) A fs. 49/80 se presenta Unilever de Argentina S.A., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inicia acción declarativa de certeza en los términos de artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Córdoba, a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión de la demandada de gravar la actividad que realiza en su jurisdicción con una alícuota diferencial (más alta) para el pago del impuesto sobre los ingresos brutos, por el período fiscal 02 del año 2016, en razón de no poseer su establecimiento productivo en esa provincia.

Puntualmente, solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley impositiva provincial 10.324, en cuanto sostiene que la pretensión fundada en dicha norma resulta violatoria de diversos derechos y garantías constitucionales, en particular de los artículos 1°, 4° a 12, 16, 17, 28, 31, 33, 75, incisos 1, 2, 10, 12, 13, 18 y 30; 125 y 126 de la Constitución Nacional.

Relata que Unilever de Argentina S.A. es un grupo multinacional cuya actividad principal es la fabricación de jabones y detergentes, desarrollando como secundarias las de fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y

tocador, como así también de preparados para limpieza, pulido y saneamiento. Destaca, asimismo, que realiza servicios empresariales, fabricación de aceites y grasas de origen animal, de materias químicas orgánicas básicas, venta al por mayor de productos cosméticos de tocador y perfumería, y de mercaderías.

Alega que la Provincia de Córdoba grava con el impuesto a los ingresos brutos -alícuota del 4,75% para el período 2016- a los ingresos provenientes de la actividad industrial que realiza -cuya base calcula de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio Multilateral- mientras que, según sostiene, aplica -de un modo genérico y arbitrario-, una alícuota del 0,50% a todas las industrias radicadas en su jurisdicción.

Asimismo aclara que no posee establecimiento productivo en la Provincia de Córdoba y que las actividades que desarrolla (identificadas con los códigos 31000 a 39000 en el artículo 17 de la ley 10.324) son fabricación de jabones y preparados para limpiar y pulir, de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador, elaboración de productos alimenticios, industrias manufactureras y matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne en dicha jurisdicción (v. fs. 22, 27 y 49 vta.).

Recuerda que conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley 10.324, aplicó en sus liquidaciones hasta el anticipo 01 del año 2016 la alícuota del 4,75%, a pesar de



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

considerar que ello constituye un tratamiento discriminatorio e irrazonable fundado solo en que su establecimiento industrial no se encuentra en la jurisdicción territorial de la demandada.

Añade que ante el perjuicio concreto que le ocasiona tributar a dicha alícuota -4,25% mayor a la que se aplica a los contribuyentes que desarrollan la misma actividad y poseen establecimiento productivo en la Provincia de Córdoba-, Unilever presentó una nota ante la Dirección General de Rentas local en la que informó que a partir del vencimiento del anticipo 02 de 2016 y para los períodos siguientes tributaría el impuesto al 0,5%. Ello dio lugar a que el organismo recaudador local la intimara al pago de diferencias y recargos en el impuesto, tal como surge de la notificación que se le practicó el 5 de mayo de 2016.

En ese contexto, aduce que la pretensión provincial constituye una invasión a las facultades exclusivas de la Nación para reglar el comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional), e instaura una "aduanas interior" que vulnera lo prescripto por los artículos 4°, 9°, 10, 11, 12, 16, 17, 28, 31 y 75, incisos 1, 10 y 13 y 126 de la Constitución Nacional. Cita jurisprudencia del Tribunal en apoyo de su postura.

Por último, desarrolla las razones por las cuales, a su entender, se cumplen los requisitos para la procedencia de la acción declarativa.

II) A fs. 125/126 vta. la parte actora señala que el 28 de octubre de 2016 fue notificada de la resolución DJRGDA-R 69/2016 por medio de la cual la Subdirección de Jurisdicción de Gestión de Recaudación de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución DJRGDA-R 24/2016.

Asimismo señala que el 3 de noviembre de 2016, la demandada le notificó la resolución DJRGDA-R 46/2016 por medio de la cual se la intimó al pago de la suma de \$ 26.159.973,04, en concepto de diferencia del impuesto sobre los ingresos brutos por aplicación de una alícuota incorrecta por los períodos fiscales 03 a 07 del año 2016.

III) A fs. 83/85 dictamina la señora Procuradora Fiscal, y sobre la base de esa opinión, a fs. 128/129 el Tribunal declara su competencia originaria para entender en la presente causa y hace lugar a la medida cautelar solicitada.

IV) A fs. 299/324 la Provincia de Córdoba contesta la demanda y solicita su rechazo.

Tras las negativas de rigor, reproduce los artículos 22 de la ley impositiva provincial 10.324 y 215, inciso 23 del Código Tributario (t.o. por el decreto 400/2015).

Destaca que el objetivo de la medida fiscal en cuestión debe entenderse como una política de promoción y fomento enmarcada en la potestad tributaria provincial de



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

promover la industria local y estimular su desarrollo, reservada para sí a través del artículo 125 de la Constitución Nacional, en la búsqueda de concretar la llamada cláusula del progreso o desarrollo al que se refiere el artículo 75, inciso 18, de la Ley Fundamental.

V) A fs. 369 obra el dictamen de la señora Procuradora Fiscal acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, que remite a lo dictaminado en su oportunidad en la causa CSJ 505/2012 (48-B)/CS1 "Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza".

### Considerando:

1º) Que, tal como lo ha decidido el Tribunal a fs. 128/129, esta causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.

2º) Que la acción deducida constituye una vía idónea para motivar la intervención del Tribunal, pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que se propone precaver los efectos de la aplicación de la ley local 10.324, a la par de fijar relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto (Fallos: 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034).

Es sabido que la declaración de certeza, en tanto no tenga carácter simplemente consultivo, no importe una indagación meramente especulativa y responda a un "caso" que busque

precaver los efectos de un acto en ciernes, al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal, constituye causa en los términos de la Ley Fundamental (Fallos: 310:606 y 977; 311:421, entre otros). A la luz de lo expuesto, en el presente caso, se advierte que ha mediado una conducta estatal explícita de la demandada dirigida a la "aplicación" de las alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos que la aquí actora cuestiona (Fallos: 311:421 y 328:4198).

En efecto, de la prueba documental agregada a la causa se desprende que la actividad desplegada por la autoridad provincial tiene entidad suficiente para sumir a la actora en un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica, por lo que la controversia es actual y concreta (Fallos: 310:606 y 311:421, precedentemente citados, entre otros).

En consecuencia, es dable concluir que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el artículo 322 del código de rito, para la procedencia formal de la acción declarativa.

3º) Que en cuanto al fondo del asunto, la cuestión a resolver en el *sub lite* presenta sustancial analogía con la ya examinada y resuelta por el Tribunal en Fallos: 340:1480 y en la causa CSJ 114/2014 (50-H)/CS1 "Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 31 de octubre de 2017, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en cuanto fueren aplicables al caso de



## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

autos, en razón de brevedad y con el propósito de evitar repeticiones innecesarias.

4°) Que, por lo tanto, la aplicación de la ley impositiva que se cuestiona, en el caso concreto, al gravar a la actora su actividad ya referida (ver punto I), con la alícuota del 4,75% obstaculiza el desenvolvimiento del comercio entre las provincias (v. los formularios de notificación de las resoluciones DJRGDA-R 24/2016 y DJRGDA-R 46/2016, cuyas copias obran a fs. 17/23 y 109/113, en particular fs. 22 y 112 vta.).

5°) Que, en tales condiciones, a la luz de los preceptos constitucionales examinados y de los criterios fijados por esta Corte a su respecto, en el *sub examine* queda en evidencia la discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación del establecimiento productivo del contribuyente, en tanto lesiona el principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional), altera la corriente natural del comercio (artículos 75, inciso 13, y 126 de la Ley Fundamental), e implica la instauración de una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución Nacional (artículos 9° a 12), para perjudicar a los productos foráneos en beneficio de los manufacturados en su territorio, extremo que conduce a la declaración de invalidez de la pretensión fiscal de la demandada (Fallos: 340:1480).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se decide: Hacer lugar a la demanda

entablada por Unilever de Argentina S.A. y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del artículo 22 de la ley 10.324 de la Provincia de Córdoba, como así también la de las pretensiones fiscales fundadas en dicha normativa (resoluciones DJRGDA-R 24/2016 y DJRGDA-R 46/2016). Con costas a la vencida (artículo 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese, comuníquese esta decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, archívese.





## *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

Nombre del actor: **Unilever de Argentina S.A.**, representada por la **Dra. María Betania Candia**; el **Dr. Eduardo Javier Dávila** y la **Dra. María Julieta Crouzel**, con el patrocinio del **Dr. Álvaro Carlos Luna Requena**.

Nombre del demandado: **Provincia de Córdoba**, representada por los **Dres. Pablo J. María Reyna y Leticia V. Aguirre**, con el patrocinio de las **Dras. Julia Enríquez y María Florencia Malvesio**.